I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 12 de diciembre de 1966 por la que se modifica el artículo séptimo del Estatuto General de los Colegios de Abogados y las normas 16 y 18 de las relativas al funcionamiento del Consejo General de la Abogacía Española.

Ilustrísimo señor:

El artículo séptimo del Estatuto General de los Colegios de Abogados de España, aprobado por Orden de 3 de febrero de 1947, y las normas 16 y 18 de las relativas al funcionamiento del Consejo General de la Abogacía establecen que los recursos de súplica y reposición han de ser resueltos por este Organismo en el plazo de diez días.

Como el conocimiento y resolución de dichos recursos está atribuido al pleno y éste se reúne preceptivamente una sola vez al trimestre, resulta aconsejable ampliar los referidos plazos en la forma propuesta por el Consejo General de la Abogacía Española y acomodar al propio tiempo los preceptos en que se regulan aquellos recursos a la legislación general sobre la materia.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—El artículo séptimo del Estatuto General de los Colegios de Abogados quedará redactado en los siguientes términos:

«La Junta de Gobierno, después de practicar las diligencias y recibir los informes que en su caso considere oportunos, estimará, suspenderá o denegará las solicitudes de incorporación dentro del plazo de dos meses, transcurrido el cual se entenderán denegadas.

Si la Junta de Gobierno denegase o suspendiese la incorporación pretendida lo comunicará al interesado, haciendo constar los fundamentos de su acuerdo. Contra esta resolución o la tática, en su caso, podrá interponer el interesado recurso de reposición en el plazo de cinco días. La Junta de Gobierno resolverá el recurso en un plazo no superior a los diez días, entendiéndose denegada la reposición si pasado ese plazo nada se dijese.

Contra el acuerdo definitivo denegatorio podrá recurrir en súplica el interesado en el plazo de ocho días al Consejo General de la Abogacía Española, el cual resolverá en el de tres meses.

Transcurrido este plazo desde la interposición de la súplica sin que se notifique su resolución se entenderá desestimada y quedará expedita la vía del recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia en la forma y plazo prevenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.»

Segundo.—Las normas 16 y 18 de las aprobadas por Orden de 28 de febrero de 1964 para el funcionamiento del Consejo General de la Abogacía Española quedarán redactadas de la siguiente forma:

«Norma 16.—Las sanciones que impongan las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados a sus Colegiados serán recurribles en súplica ante el Consejo General en el plazo de ocho días, el que resolverá con carácter definitivo en el de tres meses, excepto cuando la sanción fuere la de expulsión, en cuyo caso contra la resolución del Consejo General podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia.»

«Norma 18.—Las anteriores sanciones serán también aplicables por el Consejo General, no sólo al conocer del recurso de súplica, sino también, directamente, en los casos del apartado ñ) del artículo segundo del Decreto de 31 de enero de 1963 y en los de habilitación para el ejercicio de la Abogacía.

En estos supuestos podrá interponerse recurso de reposición ante el propio Consejo General en el plazo de cinco días, quien resolverá en el de tres meses con carácter definitivo, excepto

cuando la sanción fuere la de expulsión, en cuyo caso contra el acuerdo del Consejo General podrá formularse recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia.»

Lo que digo a V I para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V I. muchos años.

Madrid, 12 de diciembre de 1966.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 1 de diciembre de 1966 por la que se aprueba la Instrucción provisional que regula la provisión de plazas de Agentes de Cambio y Bolsa por el turno de oposición libre.

Ilustrísimo señor:

El Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, al referirse a la provisión de plazas vacantes de Agentes de Cambio y Bolsa por el turno de oposición libre dispuso que los requisitos que se exijan para participar en la misma, las materias y circunstancias personales a que han de referirse, así como la composición de los Tribunales y procedimientos a seguir, habrían de ser determinados reglamentariamente.

Posteriormente, el Decreto 1437/1965, de 20 de mayo, facultó al Ministerio de Hacienda para fijar las normas a que deberán ajustarse las oposiciones libres, así como las circunstancias requeridas para participar en las mismas.

Dicha regulación habrá de figurar en su día en el Reglamento orgánico y funcional de los Agentes de Cambio y Bolsa, aludido en el artículo 27 del mismo Decreto-ley, pero como se trata de una disposición que por razón de su naturaleza requiere una compleja y meticulosa elaboración, y de otra parte la celebración de oposiciones libres no admite una espera tan dilatada, tanto por la conveniencia del servicio como por la exigencia derivada del artículo cuarto del Decreto ya mencionado de 20 de mayo de 1965, parece lo más aconsejable dictar, aunque sea con carácter provisional, las normas reguladoras de las oposiciones libres a Agentes de Cambio y Bolsa, con lo cual, además de cubrir una necesidad que cada día admite menos demora, se podrá adquirir un cierto caudal de experiencia sin duda muy beneficioso para la definitiva ordenación de tan importante materia.

En su vista, este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del número dos del artículo 26 del Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, y en uso de la facultad que expresamente le confiere el artículo quinto del Decreto 1437/1965, de 20 de mayo, ha tenido a bien disponer que las oposiciones libres para cubrir plazas vacantes de Agentes de Cambio y Bolsa se rijan por las normas contenidas en la siguiente Instrucción provisional.

Primera.—Las oposiciones libres para cubrir plazas de Agentes de Cambio y Bolsa se convocarán por este Ministerio de Hacienda mediante Orden que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», concediéndose un plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación, para la presentación de instancias por parte de quienes pretendan concurrir a las mismas.

Segunda.—En la convocatoria se incluirán, además de las normas que hayan de observarse para el desarrollo de la oposición, los programas e índices de supuestos relativos a las materias integradas en los diversos ejercicios que al efecto se establezcan, haciéndose constar el número de vacantes a cubrir y las Bolsas a las que pertenecen.